

LAS POBLADORAS Y EL ESTADO

Teresa Valdés & Marisa Weinstein

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO

El Estado, con su acción, crea y recrea legitimaciones sociales que dan cuerpo a la integración de la sociedad bajo una determinada hegemonía. Existe un conjunto de instancias estatales (instituciones, actividades y funcionarios) frente a los cuales los ciudadanos establecen relaciones cara a cara de manera regular. Estas instancias hacen del Estado campo de experiencias, comportamientos y percepciones, convirtiéndose en expresiones tangibles del poder central en la vida cotidiana de individuos y grupos.

Específicamente, para las mujeres de sectores populares urbanos, el Estado posee una existencia cercana y vivencial, en el marco de la división sexual del trabajo que las deja a cargo de la reproducción cotidiana y generacional de la mano de obra. Dentro de sus actividades diarias, las mujeres se contactan con diversas instancias estatales para satisfacer variadas necesidades.

En este texto queremos presentar algunos resultados de una investigación dirigida a recoger las percepciones sobre el Estado de pobladoras de dos comunas de Santiago.

Esta investigación tuvo un carácter exploratorio e intentaba acercarse a qué es el Estado para las pobladoras desde un punto de vista particular: el que hacer cotidiano de las mujeres. Es decir, intentamos articular las rutinas diarias de las mujeres con la acción total que les está dirigida. Parece ya un dato de la realidad que las mujeres son las actrices de una parte significativa de las políticas sociales, en particular de todas aquellas que tienen asiento local, ya sea las de subsidios directos o las que se integran en programas de desarrollo. Preferentemente son las mujeres quienes canalizan las políticas sociales a sus familias, quienes se organizan en los barrios, quienes del modo que sea, aseguran sustento y protección a sus hijos.

Esta relación cotidiana implica que las mujeres ven y actúan frente a un "Estado en acción", que se traduce en funcionarios y programas, que no necesariamente tiene una lógica coherente y común. El Estado tiene un rostro concreto. No se trata, entonces, de observar sólo la presencia explícita de

derechos sociales y políticos en La Constitución Política del País, sino como se actualiza la ciudadanía de las mujeres en la relación con la acción cotidiana del Estado, entendido éste como expresión institucional de la sociedad, como aquel referente en que los integrantes de la sociedad se reconocen.

En este contexto, queremos centrarnos en la dimensión de ciudadanía social para las mujeres. Entre las entrevistadas existe una memoria histórica pre-golpe militar que contempla al Estado como instrumento de promoción de los sectores populares, como el garante de que estos sectores pudieran ejercer sus derechos. Se trata del Estado de bienestar que, a pesar de las importantes diferencias entre los distintos gobiernos, se extendió desde los gobiernos radicales hasta 1973 y que se tradujo en que sectores cada vez más amplios de la población pudieron mejorar sus condiciones de vida. Se otorgaron progresivos beneficios en salud, vivienda y educación, y mayores ingresos a través de políticas laborales y una creciente intervención estatal. Es así como Chile resulta un país pionero en lograr altos niveles de desarrollo y cobertura de las políticas sociales.

Desde el Estado se asumía a la familia (“cédula básica de la sociedad”) obrera o de los empleados como destinataria de su acción, donde el varón es proveedor de los recursos y la mujer es la encargada del trabajo doméstico, reproductora y agente principal de socialización. Las políticas sociales eran aplicadas fundamentalmente a través de los sistemas formales de previsión, es decir, favorecían a los asalariados, que eran mayoritariamente hombres, y se alcanzaban a través de presiones políticas y sociales, espacio también masculino. Por otra parte, el Estado implementaba una línea específica de acción para y con mujeres pobres, “los centros de madres”; en ellos se trataba de preparar a las mujeres para su mejor desempeño como “dueñas de casa” y madres y para iniciarlas en otros aspectos de la vida institucional del país, como la participación laboral y política.

Las entrevistas recuerdan este “andamiaje estatal” que incitaba a que la familia “progresara” cuyo discurso era que, con esfuerzo, podía ir mejorando sus condiciones. Tenían oportunidades para educar a los hijos que, por esta vía, podían “surgir”.

Con el golpe militar, la concepción misma del Estado sufrió profundas transformaciones. El papel subsidiario del Estado y sus políticas sociales

selectivas y focalizadas cambiaron radicalmente la relación del Estado con los sectores populares; este realizaba una acción asistencial, orientando sus programas hacia aquellos hogares y personas, definidos individualmente, que no estaban en condiciones de incorporarse al mercado, es decir, de satisfacer con sus propios medios sus necesidades más esenciales. Todo ello unido a una brutal represión y la intervención y control de las organizaciones comunitarias (junta de vecinos y centros de madres).

El Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia que asumió en marzo de 1990, mantuvo el modelo de economía abierta y, en ese marco, ha ido implementando cambios dirigidos a saldar “la deuda social” heredada del régimen anterior. Su consigna ha sido “crecimiento con equidad”. En este contexto, las opiniones de las pobladoras entrevistadas recogen pocos cambios substanciales en el área de la política social, que fue uno de los ámbitos mas trabajados en nuestro estudio.

Las mujeres acuden a los distintos servicios estatales buscando solucionar problemas concretos, y también esperan apoyo para “progresar” y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no lo encuentran, ya que la mayor parte de los programas y subsidios sociales están focalizados hacia los “extremadamente pobres”. Critican especialmente los instrumentos y procedimientos de focalización de los programas y subsidios sociales. Las entrevistadas indican que ellas quedan fuera de esta definición de destinatarios, no obstante sufrir un nivel importante de carencias. Señalan que los criterios para seleccionar a “los más pobres” no tienen que ver con sus privaciones, sino con un estilo de vida “sucias, desganadas, con mala relación con los hijos...” “Para ser parte de los beneficiarios, tiene que mentir y esconder bienes, de modo de obtener el puntaje necesario en la Ficha CAS-2. Así su realidad es excluida del escenario y quedan en una situación de desamparo: no son objeto privilegiado de los subsidios y beneficios, al tiempo que tampoco están integradas – como grupo familiar - al mercado. Su situación de sobrevivencia perdura y se mantiene sin capacidad de mejoramiento.

Los funcionarios públicos con que las pobladoras se relacionan devuelven una imagen estereotipada de los pobres: son personas receptoras/pasivas, que no despliegan esfuerzo alguno por ninguna iniciativa: tienen la casa sin limpiar, no poseen ningún bien “moderno” (televisor, camas,

cocina de gas, refrigerador etc.), sus niños se enferman frecuentemente, son alcohólicos... la visión clásica de la indigencia, la familia clochard.

En consecuencia, los esfuerzos por progresar, por mejorar su calidad de vida, no son recompensados. La dignidad de la pobreza no es reconocida. En este contexto, el maltrato que las mujeres reciben de estos funcionarios se entiende como el que merece los miserables que sólo reciben y nada aportan a la sociedad.

El Estado en su acción hacia las pobladoras, reproduce una manera tradicional de entender la relación de pareja: la mujer subordinada al varón y a cargo de los quehaceres domésticos.

Los problemas de acceso a los distintos programas sociales fuerzan a que sean las mujeres que no trabajan remuneradamente fuera del hogar, quienes acuden a ellos. En efecto, hay que tener determinadas condiciones para “perder el día” o varios días en tramites. Se sobrentiende, así, que todas las mujeres pobres son sólo “dueñas de casa”.

No existen programas promocionales que impulsen a las mujeres a buscar trabajo remunerado. El Prodemu, de reciente creación y pocos recursos, es el único programa público que respalda iniciativas colectivas de generación de ingresos que las mismas pobladoras se han dado. Las pobladoras no reconocen otros programas que estimulen a las mujeres a participar en forma más autónoma en la solución de sus problemas.

En su calidad de esposas, hay diversas situaciones en que las mujeres esperan una “intervención” estatal en su relación de pareja, dada la desigualdad que en ella existe. Es así como presentan su caso ante alguna funcionaria pública (asistente social, matrona, medico, etc.) y señalan que la mayoría de las veces no son acogidas. Más aún, en la interacción, este tipo de información es requerida, pero las funcionarias se limitan –en opinión de las mujeres – a reproducir los esquemas tradicionales, sin ayudarlas a buscar mecanismos de cambio que la induzcan a desarrollarse en mejor forma.

En relación a la violencia domestica e incumplimiento de obligaciones parentales, esperan protección del Estado y es casi el único medio de que disponen para enfrentar esta situación.

Señalan que a los hombres le es fácil burlar la acción de la justicia cuando se les requiere por pensiones alimenticias para los hijos. También

indican que no tienen información sobre las gestiones que en este ámbito pueden hacer.

En relación a la protección en situaciones de violencia doméstica, las mujeres acuden como primer paso a Carabineros para estampar la denuncia. Frente a los resultados de este procedimiento, las opiniones son unánimes: para muchas, los carabineros no sólo no apoyan a las mujeres, sino que se burlan de ellas. Para otras, en cambio, ellos actúan como protectores de la mujer, produciendo temor en los hombres por la represión de que es objeto. En todo caso, el hecho de que no exista unanimidad y que bastantes entrevistadas indiquen falta de apoyo policial, expresa la no preocupación explícita del Estado por este problema que afecta a un porcentaje significativo de mujeres. La impunidad de los agresores y la falta de recursos institucionales de apoyo a las mujeres golpeadas, plantean la legitimidad del poder del varón sobre el cuerpo de su pareja, refrendada por la inexistencia de penalización a la violencia doméstica.

Las mujeres esperan de los carabineros una represión disuasiva sobre la pareja agresora: con ellos tendrá que enfrentarse a iguales o superiores en fuerza física. Además, esperan que los funcionarios judiciales donde se realiza la denuncia actúen como una autoridad que deje en claro al hombre las consecuencias que pueden sufrir si mantiene su conducta (“tener que irse de la casa”, etc.).

Hay otras situaciones de conflicto con sus parejas (alcoholismo, no entrega de pensiones alimenticias, entre otras), en que las entrevistadas buscan la intervención de funcionarios estatales como autoridad fundamentalmente represiva.

Nuestra cultura considera la maternidad como parte consustancial del ser mujer. El Estado, con su acción, reproduce esta identidad, ya que en los dispositivos estatales para atender, apoyar o encauzar el cuidado de los niños –la maternidad social – el adulto considerado es la mujer. Son las madres las que llevan los niños a control de salud en los consultorios, las que eligen los colegios y los matriculan, las que gestionan los subsidios dirigidos a ellos. Son ellas también las que acuden a la comisaría a buscar sus hijos adolescentes cuando han sido detenidos o los acompañan a los tribunales cuando han sido citados.

Respecto a la educación, para las pobladoras, las escuelas son un espacio formativo en que la acción de los padres (ambos) es muy importante para reforzar el aprendizaje de los niños: es necesario controlar que asistan a clases, que hagan las tareas, que rindan en los estudios. Piensan que los niños, en general, tienen tendencia a la indisciplina y a no cumplir con las obligaciones escolares. Se requiere, entonces, súper vigilarlos y disciplinarlos constantemente. En esto, resulta vital la participación paterna, por el peso de su autoridad; es por ello que aspiran a que los establecimientos educacionales exijan la presencia de los padres. La educación formal tiene una connotación de promoción social muy importante entre las mujeres: el niño que estudia y es un buen alumno, tiene mayores opciones de “surgir”. No obstante, los hombres – padres – no cumplen adecuadamente las expectativas, señalan, y solo aspiran a estar presentes en el momento de la culminación, cuando los niños – ya jóvenes – se gradúan de la enseñanza básica o secundaria y reciben diploma.

En lo que se refiere a la salud de los hijos, la participación de los padres se limita a hacer la cola temprano para obtener número en el consultorio, y ello porque es peligroso – por la delincuencia – que las mujeres salgan en la madrugada y esperen tantas horas en la calle. Sin embargo, es impensable que los padres lleven a los niños al médico o se preocupen de las vacunas o de su salud dental. Tampoco es requerida su asistencia por parte de los médicos y funcionarios públicos. No existe ningún programa de salud preventiva que los incorpore explícitamente, ni los horarios de atención le permiten, si tienen trabajo.

No obstante pueden apreciarse contradicciones en esta relación del Estado con las mujeres en tanto madres.

En los programas de atención de embarazo y de control de natalidad, esta aparente responsabilidad total de las mujeres sobre sus hijos no se refleja en el trato que reciben. Esta exigencia no es refrendada con una actitud que acoja las dudas e interrogantes de las mujeres sobre su cuerpo, que es el que alberga a los hijos. Son tratadas en forma dura, como máquinas unas iguales a las otras, sin ninguna explicación sobre los procesos que viven.

Los dispositivos estatales de apoyo a la crianza de los hijos demarcan ámbitos en lo que las madres son inhabilitadas: en la educación, las madres

solo pueden apoyar la disciplina que moldea el comportamiento de sus hijos, pero no tienen nada que decir ni pueden acompañar la incorporación de contenidos formativos, al carecer de los conocimientos necesarios; en la salud, saben las atenciones básicas del cuidado de los niños y aspiran a que los médicos utilicen la máxima tecnología disponible para diagnosticar y tratar a los menores, distanciándose ellas aún mas de estos cuidados; para la estimulación de los niños m más pequeños, se crean jardines infantiles como instancias especializadas que los incorporan más tempranamente a la sociedad y les entregan herramientas que les dan ventaja en este proceso, sin valorizar la capacidad de las madres.

En el acceso de los niños a los jardines infantiles y a los centros abiertos también se manifiesta esta contradicción. En efecto, como complemento de la responsabilidad exclusiva de las mujeres en la crianza de los hijos, esta tiene una importancia fundamental en su sentido de la vida y en su cotidianidad. Los niños acompañan y llenan el tiempo, aunque sean cansadores y demandantes. Es así que cuando tienen la opción de ponerlos en un jardín infantil, muchas ni siquiera se lo plantean y otras lo hacen con un gran esfuerzo, porque les cuesta no tenerlos todo el tiempo a su lado. Las razones-explicaciones dadas para llevarlos a algún establecimiento son que allí pueden cubrir necesidades de alimentación que en la casa no se puede por la mala situación que atraviesan, y que es un lugar en que se socializan en el contacto con otros niños, además de aprender diversas cosas. También acuden a ellos cuando no pueden controlarlos, como es el caso de los niños “callejeros” y muy inquietos.

Cuando las pobladoras acuden a instancias estatales, enfrentan a un Estado excluyente que no las acoge en sus problemas y que se relaciona autoritariamente con ellas.

Sus percepciones de los funcionarios estatales señalan que estos cumplen su tarea burocráticamente, apurados, y que tienden a no satisfacer los requerimientos de las mujeres. No poseen cualidades de servicio público, sino que pareciera que las usuarias o destinatarias de su quehacer estuvieran siempre importunándolos.

Las asistentes sociales constituyen un personaje clave en la interacción con el Estado. Ellas tienen poder de decisión en el otorgamiento de los

beneficios y, por su rol, pueden inquirir en aspectos íntimos y supuestamente privados de la vida de las mujeres como es su relación de pareja, con los hijos, las condiciones en que viven, etc. Realizan esta indagación sin considerar que se trata de elementos afectivamente delicados para las mujeres y, por tanto, muchas veces estas entrevistas con “la visitadora” se convierten en interrogatorios humillantes, con el agravante de que ni siquiera sirven para conseguir algo. La asistente social no les entrega información sobre las posibilidades de éxito de la gestión, sino que se limita a inquirir la información de un modo duro y a indicar los comportamientos que deben seguir las pobladoras.

Otros funcionarios importantes para las mujeres son los médicos y las matronas. El tema de la salud es particularmente relevante para las mujeres y aparece como un dominio femenino, no sólo para las mayores consultas medicas que realizan, sino también porque manejan mas conocimientos sobre enfermedades y que hacer frente a ellas. En este sentido, quieren comunicarse y conocer bien el diagnóstico y tratamiento que necesitan ellas o sus hijos. Constituyen además las únicas posibilidades de hablar sobre los problemas y cuidados del cuerpo, lo que es mas claro aún respecto de los controles ginecológicos. Los profesionales cuentan con el respaldo de una cultura que valora y jerarquiza el saber especializado y formalizado. El personal encargado de la salud no toma en cuenta estos elementos y su trato es frío y cortante, sin explicaciones ni conversación. Las mujeres comprenden que esto se debe en gran parte a la sobrecarga de pacientes que deben atender, pero igualmente repercute en ellas.

Los carabineros y funcionarios de investigaciones son un caso diferente, puesto que se relacionan con ellos por necesidad (dado el medio violento en que viven), pero lo que esperan de ellos es un servicio y no les reconocen autoridad. Su trato de prepotente y agresivo, dicen ellas, “se escudan tras el uniforme o el arma” haciendo ostentación de su poder.

Las pobladoras señalan que se les asigna un carácter permanentemente de sospechosos –a ellas y sus familias – por vivir en poblaciones, lo que se refleja en la relación con los órganos de justicia y con las fuerzas policiales: la fantasía es que pueden terminar procesadas y encarceladas sin haber cometido delito alguno. Esta situación es particularmente grave en el caso de

los jóvenes. Ello habla de la sensación de ser expulsadas del escenario en cualquier momento y no estar protegidas en sus derechos.

En suma, resulta evidente la voluntad de disciplinamiento del Estado hacia las pobladoras. Considerando el disciplinamiento un mecanismo constitutivo de un orden hegemónico, el autoritarismo impuesto por el gobierno militar imprime una fuerza especial a esta lógica estatal, convirtiéndola en un modo habitual de acción que perdura hasta hoy. Los procedimientos utilizados, los requisitos exigidos, la individualización de los beneficiarios, los pobres como permanentes sospechosos, tienen una fuerza moldeadora para la cual no existen hoy contrapesos. Ello tiene como consecuencia la reproducción – en todos los niveles – de un modelo autoritario de premios y castigos, donde el Estado como autoridad superior impone un orden y establece sanciones a lo considerado incorrecto. Las mujeres, a su vez, acuden en ocasiones a servicios estatales por esta misma lógica. Es el caso de su aspiración a que las escuelas y liceos disciplinen a sus hijos, puesto que ellas mismas no los pueden controlar, o que los carabineros amenacen a sus parejas para que no las golpeen.

Por otra parte, la mayoría de los programas sociales con que las mujeres se contactan son asistenciales. Los subsidios son exiguos en su monto y están desconectados entre sí, de manera que se induce a buscar las formas de acumular todos los beneficios posibles. De este modo, se pervierte la relación de las mujeres con él con el Estado: priman “los vivarachos”, es decir, aquellas personas que articulan un discurso y adecuan la información para acumular los beneficios que puedan.

Sin embargo, a pesar de esta visión que hemos descrito, las pobladoras sienten que el Estado es un agente crucial en sus vidas. Lo describen presente desde el momento que nacen y en las distintas etapas de su vida; lo asocian con trámites, con beneficios y seguridad, pero también con identidad: el Estado somos todos, la Patria, el Territorio. No obstante, para las pobladoras el Estado tiene el rol fundamental de ser el instrumento de los pobres en una sociedad en que los ricos tienen el poder económico y las ansias ilimitadas de acrecentar su riqueza. En este contexto, echan de menos una acción cotidiana al servicio de los sectores postergados, con respecto a sus decisiones y a su propia capacidad de actuar. Es entonces en la relación con los funcionarios y la

calificación de los pobres donde se concentran las mayores críticas.

|